E

n todas las profesiones y en todo el mundo hay personas de diferentes actitudes éticas. Lo más común es no encontrar extremos, es decir, ni todo se hace mal, ni todo se hace bien.

En nuestro país, como en muchos otros, los recursos para identificar las conductas indebidas son insuficientes. Por lo tanto, muchísimos hacen trampas sin ser detectados.

Además, falta autoridad moral a quienes pretenden juzgar la conducta de otros, cuando ellos mismos podrían ser reconvenidos por ciertos actos indebidos.

En concreto y desafortunadamente, contadores nos han contado que algunos colegas suyos se dedican a preparar declaraciones tributarias falsas con el fin de que el respectivo contribuyente pague menos. Se hacen trampas simples, como incluir cifras irreales en los formularios, o complejas, como preparar toda una cadena documental para aparentar que las operaciones son reales. Hay empresas que venden a otras facturas para que se declaren como erogaciones. Muchos cobran un porcentaje de los impuestos que dejan de pagarse.

En esto están involucrados unos y otros y ambos deberían ser objeto de castigo. Hay que sancionar severamente al contribuyente, que se beneficia directamente de las trampas, en lugar de seguir pensando que al tratar rigurosamente a los contadores se logrará reprimir los actos negativos. Muchos contribuyentes solo tienen consecuencias económicas, cuando también deberían ser objeto de investigaciones penales. El que no quiere pagar impuestos es fuente de corrupción porque acude a terceros, que no son solo contadores, para lograr sus propósitos.

Para que las cosas puedan funcionar como se espera hay que partir de estructuras justas. Hay actividades, empresas, que apenas dan para vivir. Resulta absurdo que el Estado trate de cobrarles impuestos, que no se producen. Esto origina una evasión, justificada por un estado de necesidad. Al tratar a estos individuos igual que a otros que tienen altos ingresos y patrimonio se incurre en injusticia.

El Estado malversa miles de millones, pretendiendo que los déficits se atiendan con créditos y, finalmente, con mayores impuestos de los contribuyentes. Llega un punto en el cual la gente ya no quiere seguir financiando la corrupción, menos cuando los impuestos suben más que sus ingresos. Por lo tanto, la integridad y transparencia de las unidades estatales y de los funcionarios administrativos es indispensable para poder exigir a los administrados aportes significativos, como lo son los que hoy existen en Colombia. Mientras los funcionarios no sean honestos, los tramposos encontrarán en ellos unos aliados.

Hay que hablarle claro a los contadores que ya son delincuentes como a los que son “medias tintas”. Y, como lo hemos venido reiterando, hay que apoyar y hacer prosperar, a los que se portan bien.

*Hernando Bermúdez Gómez*